

JUZGADO 1ª INSTANCIA N° 1 DE JEREZ DE LA FRONTERA
JUZGADO DE FAMILIA

Procedimiento: Familia

Sobre: Medidas provisionales

De: D. Antonio Medina Caro

Procurador: Dª Paula Jackeline Hurtado Auquilla

Letrado: D. José Antonio Gutiérrez Muñoz y Dª Miriam Guzmán Paredes

Contra: Dª María Teresa Mancha Cortés

Procurador: D. Pablo Barea Labrador

Letrados: D. Emilio Baez Cordero y D. Francisco de Borja Arroyo Figueroa

AUTO DE MEDIDAS PROVISIONALES

En Jerez de la Frontera, a 21 de Noviembre de 2013.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la procuradora Dª Paula Jackeline Hurtado Auquilla, en nombre y representación de D. Antonio Medina Caro, se formuló en la demanda de divorcio una petición de medidas provisionales al amparo del art. 773.1 de la LEC frente a la demandada Dª María Teresa Mancha Cortés.

SEGUNDO.- Que registrada la demanda de divorcio en el libro de su naturaleza con el correspondiente número de orden se formó la presente pieza separada incidental para la tramitación y sustanciación de la solicitud de medidas provisionales en la que se interesaban los efectos y medidas a que se refieren en el art.103 del Código Civil consistentes en la separación provisional de ambos cónyuges, la cesación de la presunción de convivencia conyugal, la revocación de los consentimientos y poderes que cada cónyuge hubo otorgado al otro y la cesación de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, y asimismo el otorgamiento a la solicitante del cuidado inmediato de los hijos y el ejercicio ordinario de la patria potestad quedando bajo su custodia y compañía, con el establecimiento del régimen de estancia, comunicación y visita propuesto en el escrito; y, el uso y atribución del domicilio conyugal, así como la contribución a las cargas familiares y la aprobación de la pensión alimenticia para los hijos expuesta en la solicitud.

TERCERO.- Que a la vista de la petición formulada, y examinada la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales, con fecha 11 de Noviembre de 2013, el Secretario judicial dictó oportuno decreto en el que admitiendo a trámite la solicitud convocó a los cónyuges y al Ministerio Fiscal a comparecencia para llevar a efecto el intento de acuerdo de las partes en relación a las medidas provisionales propuestas, con todas las prevenciones establecidas en los arts. 771, 440.1 y 442 de la LEC.

CUARTO.- Que celebrada en el día 18 de Noviembre de 2013, la comparecencia establecida en la Ley, no existió acuerdo de los cónyuges sobre las medidas a adoptar, por lo que fueron oídas las alegaciones de los concurrentes. Con el resultado que es de ver en autos con la exploración de los hijos menores habidos en el matrimonio, terminando la vista con las conclusiones y alegaciones de las partes sobre los hechos controvertidos y el dictamen del Ministerio Fiscal, quien informó sobre las medidas que

deberían adoptarse en beneficio de los hijos menores, quedando los autos para resolver, con citación de las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El apartado 1 del art. 773 de la LEC establece que el cónyuge que solicite la nulidad de su matrimonio, la separación o el divorcio podrá pedir en la demanda lo que considere oportuno sobre las medidas provisionales a adoptar, disponiendo los apartados 2 y 3 del citado precepto que admitida aquella, el Tribunal resolverá sobre las peticiones formuladas y, en su defecto, acordará lo que proceda, dando cumplimiento, en todo caso, a lo dispuesto en el art. 103 del CC, si bien, antes el Secretario judicial convocará a los cónyuges y, en su caso, al Ministerio Fiscal, a una comparecencia, que se sustanciará conforme a lo previsto en el art. 771.

SEGUNDO.- El art. 773 de la LEC, también en su apartado 1, establece como requisito para la petición de medidas provisionales del cónyuge demandante que no se hubieren adoptado con anterioridad.

El Secretario, examinó la solicitud y los documentos a la misma acompañados desprendiéndose, que las medidas provisionales no habían sido adoptadas con anterioridad y que este órgano judicial es competente territorialmente para el conocimiento de las medidas interesadas, por lo que concurriendo los demás requisitos legales como la jurisdicción, competencia objetiva, funcional y territorial así como la capacidad y legitimación de la demandante y su cónyuge, dictó decreto admitiendo a trámite la solicitud y citando a los cónyuges y al Ministerio Fiscal a comparecencia, en la que se intentó un acuerdo de las partes, acudiendo los cónyuges asistidos por Abogado y representados por Procurador; y, en el acto de la comparecencia, dado que no hubo acuerdo alguno de los cónyuges sobre las medidas a adoptar, siendo oídas las alegaciones de los concurrentes.

TERCERO.- Que como establece el art. 102 del CC, habiendo sido admitida la demanda de divorcio, se produce, por ministerio de la Ley, la separación provisional de ambos cónyuges y la cesación de la presunción de convivencia conyugal; y, al propio tiempo, la revocación de los consentimientos y poderes que cada cónyuge hubiere otorgado al otro y la cesación de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

CUARTO.- A la vista del resultado de la comparecencia, al amparo de lo establecido en el art. 92 del CC, en atención al eficaz beneficio de los menores en cuanto a la guardia y custodia de éstos, dado que la patria potestad compartida por los dos progenitores no impide que se le otorgue a uno de ellos el cuidado inmediato de los hijos y el ejercicio ordinario de la patria potestad, procede que los hijos menores de edad queden bajo la custodia y compañía del esposo-solicitante.

QUINTO.- El art. 94 del CC dispone que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía y, continúa dicho precepto señalando que el Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieran graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial; así, y en relación al régimen de estancia, comunicación y visitas, lo cierto es que el derecho de visitas no es

un propio y verdadero derecho sino un derecho-deber de los progenitores para cubrir las necesidades afectivas y educacionales de los hijos, por ello, procede que los cónyuges establezcan dicho régimen y, en caso de discordia, de la forma y manera que se dirá en la parte dispositiva de este auto.

SEXTO.- Dada la inexistencia de acuerdo en cuanto el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella y la redacción del art. 96 del CC que dispone que corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden, así como la aplicación del principio del interés más necesitado de protección que es en definitiva el regulador de todas las situaciones matrimoniales o familiares en patología o crisis, procede decretar que la solicitante de las medidas provisionales pueda permanecer en el hogar familiar con el uso y disfrute del ajuar y mobiliario doméstico habido, debiendo ser requerido la esposa en la forma que en la parte dispositiva se dirá para que proceda al desalojo la vivienda conyugal dejándolo vacío de sus propios enseres y ropas personales, previo inventario que deberá tener lugar al efecto.

SÉPTIMO.- El art. 103.3 del CC señala que el Juez, a falta de acuerdo de cónyuges, procederá a fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro, añadiendo que se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicara a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad. Así, a la vista de que las cargas actuales del matrimonio consisten en el pago de los recibos provenientes de los gastos de luz, agua y gas y gastos relativos al pago de las cuotas de la comunidad, en su caso, procede fijar como contribución a las cargas familiares el montante necesario para cubrir estos gastos, y que estas cargas sean satisfechas por la esposa tal y como este tribunal entiende que se estaba haciendo, debiéndose efectuar los pagos en la forma que en la parte dispositiva se establezca.

OCTAVO.- El art. 93 del CC señala que el Juez, en todo caso, determinará la contribución de cada progenitor para satisfacer los alimentos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, por ello, en concepto de pensión alimenticia para los hijos, examinados los documentos aportados por ambos cónyuges, procede establecer la obligación de la contribución de la esposa en la cantidad mensual de 250 euros por cada uno de los hijos menores, especificándose el modo del abono en la parte dispositiva de este auto. Con respecto al hijo mayor de edad, que no reside en el domicilio pero depende económicamente de sus padres, este tribunal entiende, que sus gastos ya venían siendo sufragados por la demandada, D^a María Teresa, y así continuará provisionalmente.

NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 773.5 de la LEC las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o la resolución que ponga fin al procedimiento de otro modo.

DÉCIMO.- Dada la especial naturaleza del presente incidente de medidas provisionales coetáneas con la demanda de divorcio no procede la imposición de las costas generadas en el mismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo la adopción de las siguientes medidas:

1ª. La separación provisional de cónyuges D. Antonio Medina Caro y D.ª María Teresa Mancha Cortés y la cesación de la presunción de convivencia conyugal.

2ª. La revocación de los consentimientos y poderes que cada cónyuge hubiere otorgado al otro.

3ª. La cesación de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

4ª. La atribución de la guarda y custodia de los hijos menores habidos en el matrimonio, Elena Medina Mancha y, al padre, Luis Medina Mancha estableciéndose el ejercicio de la patria potestad compartida por ambos progenitores.

5ª. Sobre el régimen de visitas, estancia y comunicaciones se acuerda lo que los cónyuges dispongan y en caso de discordia, se establece que la madre, como progenitora no custodia, podrá visitar a los menores y tenerlos en su compañía durante los períodos siguientes:

1. Los fines de semanas alternos desde las 17 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo.
2. En periodo de vacaciones de navidad le corresponderá la mitad de las vacaciones escolares, los años pares coincidiendo con el 24 de diciembre y los años impares coincidiendo con el 31 de diciembre y el 5 de enero. El día 6 de enero podrá recoger sus hijos desde las 17 horas hasta las 21 horas todos los años.
3. En las vacaciones de semana santa le corresponderán los años impares desde el domingo de ramos al miércoles santo y los años pares del jueves santo al domingo de resurrección.
4. En las vacaciones de verano tendrá derecho a la mitad de las vacaciones escolares pudiendo elegir el padre los años pares y la madre los impares.

Este régimen estará regido por el criterio de máxima flexibilidad, pues regirá en defecto de acuerdo entre los progenitores siempre que este sea posible y teniendo en cuenta para las decisiones que sobre los mismos se adoptaran, el bienestar y la voluntad de los menores. En defecto de la madre, que por cualquier causa no pueda acudir a dicha visitas, será la abuela materna la que recogerá a los menores y quedara en su compañía. Si bien sería recomendable que ambos progenitores, en interés de los menores, hicieran un esfuerzo por intentar que este régimen funcione, ya que la obstaculización al mismo podría valorarse en sentencia para determinar quién debe asumir la custodia exclusiva.

6ª. El uso de la vivienda familiar, sita en C/Corredera Nº 10 de Jerez de la Frontera, y de los objetos de uso ordinario de ella corresponden a los hijos y al cónyuge en cuya compañía quedan, requiriendo a la esposa para que en el plazo que se fija de 10 días, desde la notificación de este auto, proceda al desalojo la vivienda conyugal dejándolo

vacuo de sus propios enseres y ropas personales, previo inventario que deberá tener lugar al efecto.

7ª. La contribución de alimentos para los hijos se establece en la cantidad de 500 euros en cuanto a los alimentos para los menores y con respecto a las cargas del matrimonio, se establece una cuantía variable que dependerá de las especificaciones supra indicadas (FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO); debiendo ser ingresadas estas cantidades, mediante transferencia o ingreso en efectivo, dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta corriente de la que es titular el marido, en la entidad bancaria Bankia, sucursal 10ª, número de cuenta 00000000340300005803, o en cualquier otra cuenta que el marido designe, debiendo ser comunicado este cambio de manera fehaciente a la esposa con el tiempo de antelación necesario; estas cantidades serán revalorizables automáticamente conforme a la elevación del IPC que publique el INE u Organismo oficial que pudiera sustituirle, tomando como base el presente mes. Todo ello sin expresa imposición de costas.

Cabe destacar que de lo acordado entre las partes este tribunal no se pronuncia entendiendo que lo establecido entre las mismas beneficiará al interés superior de los menores (con especial referencia al tratamiento médico del hijo menor).

Los efectos y medidas acordados quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.

Se acuerda la unión de la presenta pieza incidental separada de medidas provisionales a los autos principales de divorcio de donde estas dimanen.

Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias y autos definitivos de este Juzgado, dejando testimonio literal del mismo en las actuaciones.

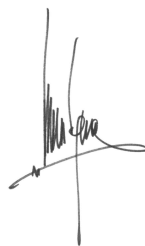
Contra la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 773.3 de la LEC, no cabe recurso alguno.

Así lo manda y firma las Ilmas. Sras. Magistradas del Juzgado de Familia Número 1 de Jerez de la Frontera, de lo que doy fe.

Firma de las Magistradas - Firma del Secretario



Alejandra Pastrana Sánchez



Miriam Pozanco Nieto



Juan José Meira Otero